

# Colombia: medio siglo de conflicto, nuevas dimensiones

Gustavo J. Fuchs Alvarado  
Universidad Nacional, Costa Rica  
Recibido 10/09/2009 • Aprobado 13/10/2009

## Resumen

Una guerra civil de más de 50 años hace de Colombia uno de los países más peligrosos del mundo. El presente ensayo busca dilucidar el conflicto colombiano pasando por sus orígenes hasta la actualidad, con la intención de descifrar las posibles repercusiones regionales que puede tener el creciente armamentismo de la nación neogranadina. Asimismo, se busca establecer parámetros geopolíticos y geoestratégicos para comprender el futuro de los conflictos armados. Se aporta una visión amplia y realista de un conflicto cuyos orígenes y desarrollo son manipulados constantemente y cuyo desenvolvimiento involucra a toda América Latina y el mundo.

## Palabras claves

Colombia, geopolítica, Plan Colombia, Full Spectrum Dominance, narcotráfico.

## Abstract

Over a fifty years' civil war makes one of the most dangerous countries in the world. This essay intends to explore the Colombian conflict describing its origins and its current situation. It is sought to establish the geopolitical and geostrategic parameters to understand the future of armed conflicts, providing a wide and realistic vision of a conflict in which its genesis and development have been constantly stage-managed. The evolution of this conflict involves not only Latin America but the whole world, therefore its analysis is a key for future conflicts understanding.

## Key words

Colombia, geopolitics, Plan Colombia, Full Spectrum Dominance, drug trafficking.

## Introducción

El conflicto colombiano es el de más larga data en las páginas de la historia latinoamericana. Sus orígenes y su evolución continúan siendo materia de estudio académico y la importancia que representa dicho conflicto trasciende el plano contemporáneo.



Tanto desde una perspectiva militar, como desde una perspectiva política, la situación colombiana es sumamente compleja, por lo que no puede ser reducida a los simples lugares comunes y retóricos que, lastimosamente, predominan en la prensa comercial.

En la actual coyuntura latinoamericana, y de cara a los más recientes eventos internacionales, es trascendental comprender las profundas repercusiones que está cobrando el escenario colombiano, no solo para América del Sur sino para toda la región.

Para vislumbrar la amplitud de los efectos conexos al enfrentamiento interno, se deben analizar tanto las variables históricas y sociopolíticas como los factores externos que inciden en el acontecer de la nación andina, sin dejar de lado los elementos geopolíticos que vinculan directamente el conflicto con otros objetivos ajenos a los intereses del pueblo colombiano.

El presente ensayo pretende aportar al estudio del complejo escenario suramericano, con un claro énfasis en la extensión de la inestabilidad ocasionada por el combate interno en Colombia. A su vez, se buscará desmontar las falsedades y confabulaciones que suelen predominar en el plano mediático, en aras de lograr aproximaciones más cercanas a la realidad.

La importancia de la situación colombiana nos obliga a reflexionar en cuanto al posible futuro de América Latina. Ninguna nación está exenta de correr el mismo destino, y hoy vemos preocupantes situaciones análogas que parecen transitar rumbos encaminados a resultados similares.

A través del esfuerzo conjunto de los diversos investigadores que han dedicado su tiempo y sus páginas al estudio de este peculiar conflicto, un prometedor futuro puede estar esperando en el crepúsculo de la historia de tan sufrida nación. Dependerá de las futuras generaciones neogranadinas si desean adoptar estos aportes para construir la paz o si prefieren continuar por el camino trazado.

### Un conflicto estructural

La guerra civil de Colombia tiene profundas raíces que se remontan a comienzos del siglo XX. Su punto culminante fue *el Bogotazo*, de 1948, emblemático evento que resultó en la muerte del líder político progresista, Jorge Eliécer Gaitán. Ese evento marcó a una sociedad devastada por la pobreza, acostumbrada al fraude y a un sistema de violencia política de profundas dimensiones, que solo un hombre se atrevía a denunciar (Lozano Guillén, 2006).

En el decenio de 1930, antes del asesinato de Gaitán, el 70% de la población colombiana habitaba en zonas rurales



(Matta Aldana, 1999). Este sector de la población enfrentaba masacres y amenazas constantes por parte del ejército, hacendados y empresas. Es por ello que fue en el campo donde comenzó a gestarse el movimiento armado que daría paso al nacimiento de las guerrillas insurgentes. Fue durante el gobierno conservador de 1946, con un recrudecimiento de la violencia, que se organizó “la *defensa popular* o las *autodefensas de masas*, grupos armados de campesinos que luchan por defender sus vidas” (Matta Aldana, 1999: 34-35).

Más tarde, estas estrategias de defensa fueron abandonadas por los liberales, quienes optaron por unirse a los conservadores y dar la espalda a sus bases. El Partido Comunista de Colombia se encargó de dichas estructuras campesinas, dejadas a su suerte, y son las que, más adelante, darían paso a la conformación de los grupos guerrilleros de izquierda (Lozano Guillén, 2006).

La clase dirigente oligárquica de Colombia se adhirió rápidamente a los esquemas militares de Washington. Cabe recordar que Colombia fue sede de la IX Conferencia Panamericana que fijaría la adopción de la doctrina anticomunista de defensa continental, que impulsaba Estados Unidos para toda la región americana. Desde los inicios del conflicto armado, la injerencia norteamericana fue clara, inclusive durante la Operación Marquetalia, de 1964, que contó con

una fuerte participación estadounidense (Matta Aldana, 1999).

Las políticas de contrainsurgencia desarrolladas por la CIA fueron adoptadas con rigurosidad por parte del ejército colombiano. En particular, la singular posición geoestratégica de Colombia se convirtió en una de las prioridades de la política exterior estadounidense, como bien lo explicaba el coronel Edward Lansdale, en 1960, cuando afirmaba que Estados Unidos debía “encargarse de la asistencia a Colombia para corregir la situación de insurrección política”, cerca de la zona del Canal de Panamá que es “*vital* para nuestra propia seguridad nacional” (Lansdale, en Stokes, 2005: 279).

La imposición permanente de la oligarquía en el poder, con el apoyo estadounidense, fue el factor decisivo en la agudización de la violencia en Colombia. Los años setenta desencadenaron una ola de descontento social ascendente, que fue brutalmente reprimida por el gobierno de Julio César Turbay Ayala, lo cual se tradujo en un crecimiento sustancial de los movimientos insurgentes (Beltrán, 2008). Los recurrentes gobiernos oligárquicos colombianos, a diferencia de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur, se caracterizaron por perpetuar asesinatos brutales y sistemáticamente (Suárez, 2006), desencadenando una ola de violencia que caracterizó la década.



Hacia finales de los años setenta y ya en el decenio de 1980, la vida política colombiana se vio fuertemente marcada por el narcotráfico. De hacerse un recuento histórico, la mayor parte de la violencia contra civiles durante esas décadas fue el producto de conflictos entre los grupos organizados de narcotraficantes que libraban batallas abiertas por el dominio de mercados y rutas (Gómez, 2008).

Fue a finales de ese período y a comienzos de la década de los noventa que se desmovilizó el grupo guerrillero M-19, el cual se convirtió en partido político. Su principal líder y candidato presidencial, Carlos Pizarro, fue asesinado (Calvo Ospina, 2008). Igual trágica suerte corrieron el político liberal progresista Luis Galán y Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica (Gómez, 2008). Los tres candidatos contaban con un alto apoyo popular y sus asesinatos representaron el fin de un posible cambio político y, para muchos, el fin de la esperanza.

Poco ha cambiado desde aquellos comienzos del conflicto. Colombia continúa siendo el país donde se registra la mayor cantidad de asesinatos a sindicalistas en el mundo (Chomsky, 2007: 260); la pobreza agobia a más de la mitad de la población, y la desigualdad, entre el 10% más rico y el 10% más pobre<sup>1</sup> tiene una relación de 80 a 1

<sup>1</sup> Este cálculo se refiere al cociente del ingreso del año 2000, cifra que se incrementó estrepitosamente del 40 a 1 que representaba en 1990.

(Stokes, 2005: 291). Más de un millón de niños trabajan y, en su mayoría, se concentran en las zonas rurales (Rodríguez, 2009).

Es evidente que el conflicto colombiano mantiene sus raíces en la estructura social de profundas desigualdades, las cuales siguen en crecimiento, lo que demuestra que el gobierno continúa en manos de una cúpula política oligárquica, cerrada al diálogo, que no reconoce los verdaderos problemas que afronta el país, o bien, no tiene interés en solucionarlos.

En palabras del renombrado colombiano Fabio Castillo (1996: 11) se trata de

...unos grupos políticos nacionales y regionales que no temen aceptar dineros de la mafia o los grandes monopolios, para luego dedicarse a legislar en su beneficio sin el menor pudor [...] buena parte de los problemas colombianos se originan, y residen, en su clase política.

### **Las FARC-EP: de la Marquetalia a la movilización**

Dentro del difícil y represivo contexto social, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) comenzaron a incursionar en diversos espacios de la selva colombiana y tomaron, como su principal eje de operación, la Marquetalia. Es en dicha localidad donde se fundó, en 1949, la primera



de varias “*repúblicas comunistas*” que se extenderían a las regiones de Río Chiquito, Sumapaz, Ariari y Guaya-bero (Labrousse, 2004: 29).

A mediados de los años cincuenta y hasta la Operación Marquetalia, ocurrida a mediados de los sesenta, las FARC-EP se enfrentaron a operaciones contrainsurgentes masivas del ejército colombiano, que terminaron por obligar a la guerrilla a cambiar su estrategia territorial a una más flexible y móvil. Es a partir de los acuerdos de cese al fuego, durante el gobierno de Belisario Betancourt, que las FARC-EP recuperaron gran parte de su base territorial. Entonces se dio el primer intento de diálogo, en 1984, la primera apertura de la oligarquía gobernante, acompañado por la creación de una Comisión de Paz que estuvo bajo amenazas constantes (Lozano Guillén, 2006).

El intento del proceso de paz emprendido por el gobierno de Betancourt terminó en fracaso y la espiral de violencia, que había caracterizado la vida política colombiana, volvió a crecer. A pesar de que el gobierno de Betancourt propuso una ley de amnistía para los guerrilleros y condiciones mínimas para la representatividad política (Gómez, 2008), los esfuerzos fueron asfixiados con la masacre perpetrada al partido de izquierda Unión Patriótica, hecho que

ha sido catalogado como un genocidio (Lozano Guillén, 2006).

A partir de dichos acontecimientos, las FARC-EP tuvieron que modificar su forma de operar. A diferencia de otros movimientos guerrilleros, como el FMLN en El Salvador, las FARC-EP no lograron tomar un control pleno territorial y más bien, el control que ejercen en sus zonas de incursión es limitado. Esto se explica, en gran parte, por la dinámica de guerra constante entre el ejército y los insurgentes, que los obliga a operar con un margen de movilidad.

#### **El nuevo orden, las nuevas dimensiones**

Con el fin de la Guerra Fría, las FARC-EP continuaron en actividad. El falso argumento de que el grupo insurgente era financiado por los soviéticos (Stokes, 2005) cayó junto con el muro berlinés y una nueva etapa del conflicto interno colombiano dio inicio.

La muerte del *zar de la droga*, Pablo Escobar, en 1993, también se convirtió en un factor decisivo para la nueva fase estratégica del choque bélico. A partir de ese suceso, los medios comerciales y los políticos tradicionales comenzaron a introducir la peligrosa tesis del *vacío de poder*, que –según ellos– podría ser cooptada por los grupos insurgentes (Gómez, 2008).



Poco a poco, las guerrillas colombianas fueron vinculadas con el narcotráfico. La estrategia concordaba perfectamente con las investigaciones que hizo Otto Reich durante su estadía en la Oficina de Diplomacia Pública<sup>2</sup>; el anticomunismo era un pretexto rancio e ilegítimo y debía ser remplazado por otros pretextos, como el tráfico de drogas, entre otros, para lograr la aprobación pública necesaria (Stokes, 2005). Fue también durante la década de los ochenta que el gobierno de Reagan declaró como asunto de seguridad nacional norteamericana, la guerra contra las drogas (Caicedo, 2006).

Sin embargo, según Noam Chomsky, el factor del narcotráfico se introdujo en el ideario estratégico norteamericano a partir de la invasión a Panamá (1989). Este triste capítulo de la historia latinoamericana significó el comienzo del *Nuevo Orden Mundial* o de la unipolaridad de la posguerra fría, donde Estados Unidos comenzó a utilizar nuevas justificaciones que cohesionaran la opinión pública a favor de su intervención (2009).

Durante este proceso, los sucesivos gobiernos colombianos plantearon la posibilidad de encontrar una solución al conflicto mediante el diálogo con los grupos irregulares. En el gobierno de Ernesto

---

<sup>2</sup> La Oficina de Diplomacia Pública fue creada como un órgano de propaganda para justificar ante la opinión pública las impopulares guerras en Centroamérica, donde Estados Unidos financiaba a la Contra en Nicaragua y a los gobiernos militares de la región centroamericana durante la década de los ochenta.

Samper (1994-1998) se efectuó el primer acuerdo humanitario unilateral por parte de las FARC-EP (Lozano Guillén, 2006). Samper no dio ningún paso hacia la profundización del diálogo y continuó con la ofensiva militar, en gran parte por los escándalos sobre su vinculación con el narcotráfico (Castillo, 1996), que le habían causado impopularidad y vulnerabilidad a su mandato.

El gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) retomó la idea del diálogo y la paz como eje de la campaña presidencial y aprovechó para iniciar reuniones con la alta dirección de las FARC-EP. Fue durante este período que se realizó la mesa de diálogo en la zona del Caguán, donde, finalmente, el gobierno se retiró<sup>3</sup> y decidió lanzar una ofensiva militar –el mismo día, unas horas después– contra las FARC-EP (Lozano Guillén, 2006).

La evolución del conflicto armado en Colombia hacia una guerra frontal contra el narcotráfico, que incluyó los grupos insurgentes, tiene como propósito justificar los enormes gastos de Estados Unidos hacia la nación andina, hoy el tercer país receptor de ayuda militar estadounidense

---

<sup>3</sup> Numerosos análisis apuntan a que el gobierno de Pastrana no tenía un verdadero interés en los diálogos de paz. Un indicio claro es la existencia del Plan Colombia, puesto en marcha junto al diálogo en el Caguán. La primera versión del Plan solo estaba redactada en inglés, una clara evidencia del intervencionismo estadounidense. También se pueden tomar como indicios los constantes “congelamientos” que hiciese el gobierno durante la construcción de la “Agenda Común” con la guerrilla, un factor que aportó al fracaso del diálogo.



(Stokes, 2005). El propio gobierno norteamericano<sup>4</sup> fue el que ideó el término *narcoguerrilla* para describir y desprestigiar los planteamientos políticos de las FARC-EP (Lozano Guillén, 2006: 88).

El Plan Colombia y las políticas militaristas del gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) han logrado poco en la lucha contrainsurgente. Aun con el apoyo extraordinario de Estados Unidos, las FARC-EP siguen dominando un amplio territorio de la nación neogranadina (ver Mapa 1). Además siguen siendo una amenaza militar. Sus ataques contra el ejército colombiano han aumentado y son más que en los gobiernos de Pastrana y Samper (Lozano Guillén, 2006). En muchos casos su presencia se ha llegado a convertir “en la única garantía de vida de pueblos amenazados por los paramilitares”<sup>5</sup> (Britto, 2008: 33).

De los 8.000 asesinatos políticos ocurridos en el 2002, el 80% ha sido autoría de fuerzas paramilitares (Stokes, 2005). Según la Fiscalía colombiana, existen 6.000 denuncias por violaciones a derechos humanos en contra del jefe del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar

y en abril del 2007 se registraron 48.250 denuncias contra grupos paramilitares (Britto, 2008).

Su accionar es de naturaleza despiadada, han llegado al extremo de jugar fútbol con las cabezas de sus víctimas y utilizan motosierras y ácidos para torturar (Ferreira, 2009: 11). Estas fuerzas criminales, aliadas al gobierno, han causado desplazamientos masivos de poblaciones que ya alcanzan “la cifra de cuatro millones de personas” (Equipo Desde Abajo, 2009: 12).

Nuevos actores también han incursionado en la escena armada de Colombia. Tal es el caso de los pueblos indígenas que viven en constante amenaza por parte de fuerzas irregulares y del ejército colombiano. Actualmente, los indígenas de la zona de Cauca (Cali) se han organizado para su defensa creando la *Guardia Indígena*, un organismo armado para su supervivencia (Zibechi, 2008: 53).

Con dicho panorama, difícilmente la salida al conflicto que se vive en Colombia puede evadir el diálogo entre las partes. A pesar de que esto es absolutamente evidente, la clase gobernante colombiana optó por profundizar el conflicto, recrudesciendo las medidas militaristas que por décadas han empeorado y empantanado la situación.

<sup>4</sup> La primera persona en utilizar el término fue Lewis Tambs, el embajador de Estados Unidos en Colombia durante el gobierno de Belisario Betancourt.

<sup>5</sup> Al analizar los movimientos de los paramilitares y los guerrilleros queda claro que en muchas ocasiones, cuando las FARC-EP se ven obligadas a replegarse de una comunidad, el despojo suele ser acompañado por masacres de civiles por parte de los paramilitares.



## El Plan Colombia, el narcotráfico y las FARC-EP

En 1999 se anunció el Plan Colombia. Fue presentado como una propuesta *asistencialista*, en la cual se iban a invertir US\$ 7.500 millones en programas de ayuda social. Pronto se conoció otra versión del Plan Colombia: “una donde el monto era de US\$ 1.600 millones y comprendía un componente militar y otro económico” (Lozano Guillén, 2006: 10). Se calcula que el 80% de los fondos del Plan Colombia son destinados a programas militares (Pineda, 2009).

La propuesta del Plan Colombia, como bien apunta Petras, es la continuación de las políticas contrainsurgentes de los sesenta lanzadas por la administración Kennedy, pero con nuevas justificaciones adoptadas por la administración Clinton (2001: 30).

La iniciativa estadounidense implicó la creación de nuevas brigadas militares, una “reestructuración” del ejército; el primer batallón antinarcóticos financiado y entrenado por Estados Unidos se estrenó en 1998 (Gutiérrez, 2009: 2), inclusive antes de la ratificación del Plan Colombia.

Otro elemento que incluía el Plan era la legalización de contratistas militares extranjeros. Si bien la presencia de mercenarios y empresas estadounidenses se dio desde inicios de los noventa, con el Plan Colombia llegaron a recibir estatus preferencial, con protección diplomática. Gran parte de los

fondos del Plan Colombia se destinan a financiar estas empresas privadas norteamericanas, contratadas para diversas labores estipuladas en el documento. Lo irónico es que “estas empresas y sus mercenarios también se han visto involucrados en el tráfico de heroína, anfetaminas y otros narcóticos” (Calvo Ospina, 2008: 289-290). Actualmente, el presupuesto total del Plan llega a US\$ 650 millones anuales, y la embajada norteamericana en Colombia es una de las más grandes del mundo (Lozano Guillén, 2006).

Pero los vínculos entre el narcotráfico y las FARC-EP no son de la magnitud que han intentado reflejar el gobierno colombiano y el gobierno estadounidense. Muchas de las acusaciones de narcotráfico que se han hecho contra el grupo armado han sido realmente exageradas. Declaraciones como las del narcotraficante brasileño Luis Fernando da Costa, que afirmaba recibir casi un tercio de la producción anual de cocaína en Colombia cada mes de manos de los insurgentes (Labrousse, 2004), reflejan la poca credibilidad del testimonio.

Lo cierto es que, en palabras del ex subdirector de la Drug Enforcement Agency (DEA), James Milford, “nada indica que los grupos insurgentes mismos estén traficando drogas, ya sea produciendo cocaína y [...] vendiéndosela a los carteles mexicanos o estableciendo sus propias redes de distribución en EUA” (Milford, en Stokes, 2005: 283).





Ciertamente, no se puede creer que las FARC-EP estén exentas del problema del narcotráfico, flagelo que afecta a todo el país. Se puede afirmar con seguridad que el grupo insurgente domina zonas de alta concentración de cultivos de coca<sup>6</sup>. Pero esta realidad es inherente a la evolución del campesinado colombiano y al recrudecimiento de sus condiciones de vida. Como explica Hernando Calvo Ospina:

Las FARC, el ELN y el EPL sostienen que no pueden prohibirle a los campesinos que cultiven coca, al no poder ofrecerles una alternativa estable de subsistencia por no poseer territorios completamente liberados. Pero sí le han propuesto al Estado el desarrollo de proyectos de cultivos alternos, algo desoído por los compromisos del Estado con Washington [...] (2008: 283).

La participación de las FARC-EP en el narcotráfico ha sido leve y varía según la región ocupada; ciertos frentes del grupo insurgente cobran un impuesto a quienes operan dentro de su territorio, mientras otros frentes han llegado a prohibir el tráfico de drogas y los cultivos, inclusive con rigurosas medidas (Stokes, 2005). Como bien analiza Labrousse, las afirmaciones de la policía colombiana

<sup>6</sup> Se debe comprender que la coca en sí es una planta y no una droga. Asimismo, la coca tiene tanto usos industriales, como tradicionales en la cultura andina. Para transformar la planta en droga (o pasta) se requiere de un proceso químico que solo se puede lograr en laboratorios de producción. Para más detalles ver: Gootenberg, 2004: 67.

sobre los laboratorios de las FARC-EP son muy dudosas y subjetivas, y si fuesen ciertas, no tendría sentido alguno que el grupo armado produjera cocaína, ya que no posee los medios ni domina las rutas para su exportación (2004).

Dicho panorama explica que no existen elementos suficientes para afirmar que el tráfico de drogas sea el objetivo del grupo insurgente, como tampoco que se trate de una política de la cúpula dirigente. Evidencia aún más clara es la incapacidad de la Fiscalía estadounidense de inculpar por narcotráfico a Simón Trinidad –alto mando de las FARC-EP–, extraditado a esa nación (Telesur, 2008).

Los datos objetivos y las investigaciones más serias demuestran que “la mayor parte del narcotráfico es realizada por los paramilitares e inclusive por ex-paramilitares” (Britto, 2008: 33-34). Como bien explica Klaus Nyholm, Director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito:

...la relación de los paramilitares con la droga es indudablemente mucho más estrecha [que la de las FARC] [...] Muchas de las bandas paramilitares surgieron como los brazos armados de los traficantes de drogas. Hoy son más autónomas, pero han mantenido sus estrechas relaciones con los traficantes. En algunos de los pueblos costeros, de hecho, es difícil a veces decir si un hombre es un jefe paramilitar, gran plantador de coca, dueño de un laboratorio de cocaína, hacendado, o



político local. Podría ser las cinco cosas a la vez (2005: 284).

La idea detrás del Plan Colombia era reducir en un 50% los cultivos de coca en el país en 2 años y, de esta forma, dar un golpe a las finanzas de los grupos insurgentes. Pero lo cierto es que a 8 años del Plan solo se ha logrado reducir 80 toneladas métricas del potencial de producción de cocaína<sup>7</sup>, en comparación con las cifras de 1999 (Pineda, 2009) y actualmente 300 mil hectáreas del territorio neogranadino están cultivadas por coca y amapola (Lozano Guillén, 2006). Inclusive, si el Plan Colombia hubiese logrado erradicar el 50% del cultivo de coca, probablemente el impacto no hubiera sido relevante para la insurgencia; solo alrededor de un 30% de los ingresos de las FARC-EP provienen del impuesto a cultivadores y narcotraficantes (Labrousse, 2004).

El Plan Colombia no toma en cuenta las asimetrías existentes entre el papel de los grupos insurgentes y los paramilitares dentro del conflicto, lo cual refleja un claro desdén por el problema de narcótico y los derechos humanos, y más bien denota el tinte político que impregna al proyecto.

<sup>7</sup> Actualmente, el potencial se sitúa alrededor de 600 toneladas métricas. Reducir las hectáreas de cultivo no afecta directamente la producción de cocaína; en 1999 una cosecha rendía para 4.2 kg, mientras que en el 2006 rendía para 7.8 kg.

Cabe recordar que Álvaro Uribe tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y con el paramilitarismo; el mandatario colombiano figura de número 82 en una lista de narcotraficantes redactada por el Defense Intelligence Agency (DIA), que también confirma los vínculos de Uribe con el Cartel de Medellín y su amistad con Pablo Escobar (Calvo Ospina, 2008). Esto evidencia por qué durante su gobierno se ha cedido muchísimo terreno a los paramilitares y narcotraficantes. No se debe olvidar el apoyo económico a la campaña presidencial que aportaron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como ha confesado uno de sus líderes, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias *don Berna* (IPC, 2009).

Uribe Vélez logró ser candidato presidencial gracias a la simpatía<sup>8</sup> que despertó su política contrainsurgente cuando fue gobernador de Antioquia. Durante su gobierno, impulsó el proyecto de las *Asociaciones Comunitarias de Seguridad*, popularmente conocidas como *Cooperativas Convivir*, un brazo armado organizado y apoyado por el ejército y las autoridades locales, que tenía como función reportar cualquier actividad insurgente (Equipo de Alternativa, 1996: 71-73).

Las *Convivir* terminaron convirtiéndose en estructuras asesinas del comando de

<sup>8</sup> La simpatía que despertó fue entre las elites, no entre la población. Una encuesta nacional para las elecciones de 1998-2002 demostró que no contaba con el apoyo popular. Para más detalles ver: Rodríguez, 2009: 5.



empresas como Chiquita Brands y fueron utilizadas para eliminar el sindicalismo. Uribe tenía pleno conocimiento de lo que hacían las Cooperativas (Guerrero, 2009). Progresivamente, el proyecto del gobernador antioqueño se extendió a lo largo del Estado, en especial en territorios pertenecientes a narcotraficantes (Equipo de Alternativa, 1996: 74). El modelo también se aplicó en otros estados del país.

De hecho, los triunfos electorales de Uribe no hubiesen sido posibles sin la coerción de los paramilitares; el escándalo de la *para-política*<sup>9</sup> confirma que no hubiese podido ganar las elecciones sin la violencia paramilitar (Córdoba, 2009). Actualmente más del 60% de los congresistas del oficialismo están involucrados en el escándalo (López, 2009: 26).

Más preocupante aún son los vínculos entre el ejército colombiano y las fuerzas paramilitares; asesinos despiadados como Salvatore Mancuso –jefe paramilitar– han confesado que fueron reclutados y entrenados por las Fuerzas Armadas (Congote, 2009). Inclusive, altos oficiales del ejército estuvieron vinculados a la creación de grupos paramilitares, financiados por el Cartel de Medellín y entrenados por mercenarios traídos de Tel-Aviv y Londres (Lozano Guillén, 2006). El líder de las AUC, Carlos Castaño, fue enviado a

<sup>9</sup> El escándalo se desarrolla a partir del pago que hicieron una serie de congresistas, alcaldes y otras personalidades del gobierno a paramilitares para que –mediante amenazas y extorsión– aseguraran el triunfo de Uribe Vélez y el oficialismo en general.

recibir entrenamiento a Israel (Calvo Ospina, 2008).

Recientemente, documentos desclasificados del gobierno estadounidense han confirmado la responsabilidad de militares colombianos en la desaparición de civiles y en la ejecución extraoficial de guerrilleros (Vieira, 2009). Claramente, el ejército es cómplice y parte.

La ofensiva oficial denominada *Seguridad Democrática* es una continuación de la política de las *Convivir*, pero ahora en el ámbito nacional. Esta iniciativa consiste en profundizar radicalmente la vigilancia y la militarización del país para “derrotar” a las FARC-EP. Se trata de una red de “informantes y cooperantes” en todo el país, a cargo de la Policía Nacional, donde también participan las empresas privadas de información. Conjuntamente se armaron brigadas campesinas bajo el programa “soldado campesino”, destinadas a motivar la confrontación armada contra los insurgentes (Calvo Ospina, 2008: 296-297).

Los vínculos entre paramilitares, militares y empresas privadas no son para nada algo nuevo o desconocido. En el 2001, la empresa Chiquita Brands entregó tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de proyectiles a las Fuerzas Armadas de Colombia, las multinacionales BHP Billiton, Anglo American y Glencore AG, admitieron haber escogido al comandante del batallón militar para que resguardara una mina



y la empresa Unión Fenosa designó a paramilitares para puestos claves en función de espiar a jefes sindicales (Ferreira, 2009).

La poca efectividad que ha tenido el Plan Colombia y las políticas del gobierno de Uribe para reducir el tráfico de drogas son un fiel reflejo de la situación interna del país, donde los paramilitares cogen en estados como Medellín (Sorín, 2009: 10). También demuestran que el enfoque contrainsurgente del Plan no ha logrado ninguno de sus objetivos.

### Nuevos recursos: el “Ojo del Huracán”

Las fértiles tierras colombianas hoy se ven dominadas por la agroindustria y los monocultivos en función de la producción de etanol y agrocombustibles. El Estado, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha incentivado el cultivo de azúcar para la producción de agrocombustibles (Arias, 2009). En la expansión de este modelo han sido vitales la participación de las fuerzas paramilitares y del ejército colombiano. Se calcula que los campesinos han perdido alrededor de 6.8 millones de hectáreas de tierra fértil por los desplazamientos. Con toda razón se dice que “en Colombia se desplaza para expropiar” (Serje, 2006: 25).

El agua también está siendo privatizada progresivamente. Los acueductos de ciudades importantes como Cartagena, Barranquilla, Cúcuta y Manizales se han otorgado en concesión a grandes

transnacionales que no solo están cobrando los costos de operación, sino también un alto porcentaje de utilidades (Colmenares, 2008).

Los resultados de la experiencia de las *Cooperativas Convivir* en Urabá demostraron que el modelo *uribista* podía “erradicar a los comunistas de los espacios ricos en recursos estratégicos para las transnacionales y el gran capital”. Así por ejemplo, la región de Urabá alberga hoy megaproyectos como el Puerto Seco o el Canal Interoceánico (Guerrero, 2009: 80).

Los vínculos entre los empresarios y el gobierno desbordan toda lógica. Ejemplo de ello es la instalación de una base militar y un *batallón especial energético* para resguardar las instalaciones de una hidroeléctrica de la transnacional ENDESA, en la región de El Quimbo, donde ha enfrentado una creciente oposición por parte de los habitantes. Esta pacífica zona se convertirá en una de las más militarizadas del país, para resguardar la energía producida, que será para exportación (Radio Mundo Real, 2009).

Oleoductos como el de Caño Limón, de la Occidental Petroleum (Estados Unidos), son atacados por los insurgentes frecuentemente. Esto representa una “amenaza para la seguridad energética norteamericana” (Grossman, en Stokes, 2005: 288). Es evidente



que la ofensiva del Plan Patriota<sup>10</sup> ha sido dirigida al sur del país, no por los cultivos de coca, sino por los recursos minerales y petrolíferos que ahí se concentran, aún bajo el control de las FARC-EP (Calvo Ospina, 2008). El papel que cumplen los paramilitares y el ejército colombiano es el de garantizar y resguardar las zonas más ricas de Colombia en beneficio del capital.

### La regionalización del conflicto

Parte del Plan Colombia implicaba una masiva campaña de fumigación, no solo dentro del territorio colombiano sino también en sus fronteras. Ecuador fue uno de los países que se vio más afectado y decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia. Los componentes de la sustancia tóxica utilizada se mantenían en secreto (Ferrer, 2009), y causaban graves problemas de salud a las comunidades aledañas, inclusive produjo la muerte de niños y el surgimiento de nuevas enfermedades (Chomsky, 2004). El caso de las fumigaciones es emblemático, ya que ilustra claramente las repercusiones regionales del Plan Colombia.

<sup>10</sup> Ofensiva militar desarrollada por el gobierno de Uribe y el gobierno estadounidense para acabar con la insurgencia en 180 días. La iniciativa falló estrepitosamente, inclusive el mismo gobierno ha llegado a reconocerlo. Sus tropas no lograron resistir las enfermedades de la selva colombiana y sufrieron muchas bajas en combate. A pesar de ello, se aprovechó la ocasión para incrementar el número de integrantes del ejército y eliminar el límite legal a la participación de mercenarios. A tres años no se había acabado con la insurgencia. Para más detalles ver: Calvo Ospina, 2008.

De hecho, el Plan forma parte de las ambiciosas iniciativas de Estados Unidos en la región: la Iniciativa Regional Andina y la Iniciativa Amazónica (Lozano Guillén, 2006). Ambas iniciativas, amparadas en la guerra contra las drogas, conllevan intereses más allá de los declarados, y pretenden reestructurar los ejércitos de la región (Britto, 2008), ampliando la capacidad de injerencia estadounidense. La región amazónica es rica en recursos estratégicos<sup>11</sup>, por lo cual se convierte en un elemento clave de la geopolítica estadounidense (Alzugaray, 2008). América Latina es un espacio *vital* para la geoestrategia global del Pentágono.

Hugo Chávez representa hoy el sentimiento antihegemónico latinoamericano y constituye un eje importante en la integración regional. Pero más allá de lo que el proyecto neobolivariano de Chávez representa, el control del petróleo venezolano es vital para Washington: hoy Venezuela es el segundo proveedor de combustible de la nación norteamericana (Bodzin, 2009). Ciertamente, el Plan Colombia también perseguía este objetivo. Como afirmó el senador Paul Coverdell, uno de los principales impulsores del Plan: “Para controlar a Venezuela es necesario intervenir militarmente a Colombia” (Coverdell, en Bernal, 2005: 214).

<sup>11</sup> Recursos como el coltan (columbita y tantalio), mineral estratégico por su utilización en las nuevas tecnologías y su alto precio, se han encontrado en Brasil y Venezuela. Para más detalles ver: Lozano, 2009.



El hallazgo de la computadora de Raúl Reyes después de la Operación Fénix<sup>12</sup> marca el comienzo de un nuevo período de regionalización del conflicto. La operación contó con el apoyo de la CIA (Rozoff, 2009). Fue con dicha operación que Uribe adoptó el modelo de *guerra preventiva* israelí, también aplicado durante la administración Bush (Casadio, 2004), que pretendía justificar futuras incursiones en territorio ajeno. Los casos que emanan de la computadora de las FARC han sido selectivos: en todos los casos han involucrado a opositores del gobierno. La Fiscalía colombiana ha decidido no aceptar los hallazgos de la computadora por su dudosa procedencia<sup>13</sup>. El último episodio emanado de la computadora fue dirigido contra el presidente Chávez, acusándolo de vender armas a las FARC-EP, hecho que fue rápidamente desmentido con un parte de guerra del ELN, de 1995, relativo a la masacre de Cararabo<sup>14</sup> (Telesur, 2009).

El golpe de Estado en Venezuela (2002) contó con el apoyo y la aprobación de Estados Unidos, dejando clara la importancia que tiene la nación sudamericana para Washington y su deseo de derrocar

a Chávez. Las últimas acusaciones que hizo el gobierno colombiano con respecto a la supuesta venta de armas a las FARC-EP revelan un claro interés por vincular a Chávez con el narcotráfico, utilizando a los insurgentes como vínculo. El gobierno estadounidense no vaciló en llamar a Venezuela narco-estado (Forero, 2009), una aseveración sumamente desproporcionada si se toman en consideración las rutas del narcotráfico global (ver Mapa 2) y el desempeño que ha tenido ese país en sus decomisos de cocaína (UNODC, 2008).

En el 2004, cerca de Caracas, fueron detenidos 130 civiles colombianos –en su mayoría reservistas– con uniformes militares venezolanos. Estos paramilitares estaban siendo entrenados en la Hacienda Daktari, del líder de la derecha venezolana Robert Alonso (Britto, 2008). Muchos de ellos se escaparon. El asunto se esclareció definitivamente cuando en una entrevista<sup>15</sup> a la que accedió la cadena Al-Jazeera, Geovanny Velásquez Zambrano (paramilitar y sicario) confesó abiertamente que Manuel Rosales (líder de la derecha venezolana) le ofreció US\$ 25 millones por asesinar a Chávez. Al no aceptar, otro grupo paramilitar tomó la oferta e ingresó a Venezuela. Según esta misma entrevista, en Venezuela hay 2.500 paramilitares colombianos (Elizondo, 2009).

<sup>12</sup> Operación militar dirigida por el ejército de Colombia. Las tropas neogranadinas incursionaron en territorio ecuatoriano sin autorización, con el objetivo de asesinar al líder de las FARC-EP, Raúl Reyes. Se lanzaron bombas en todo el perímetro y el cadáver de Reyes fue transportado a Colombia.

<sup>13</sup> Esta afirmación se hace a partir del caso del profesor Miguel Ángel Beltrán.

<sup>14</sup> Así se le denomina a la ofensiva militar del ELN en Cararabo (Venezuela, frontera con Colombia), donde los insurgentes atacaron un puesto del ejército venezolano, llevándose consigo un importante arsenal.

<sup>15</sup> Se cree que la entrevista pertenece a la Fiscalía colombiana.



Recientemente también se han dado hechos similares a los que dieron origen al paramilitarismo en Colombia; panfletos y amenazas al mejor estilo de las AUC son distribuidos en parroquias y barrios marginales de Caracas (Gutiérrez, 2009). Evidentemente se trata de restar legitimidad a las autoridades para desestabilizar al país, al margen de las dimensiones reales del problema.

El gobierno norteamericano podría estar detrás de dicha estrategia, como lo confirmase la investigadora Eva Golinger durante una entrevista con la cadena Telesur (2009):

...hay documentos de Estados Unidos, del Pentágono, del Comando Sur y su división de inteligencia, que dentro de mis investigaciones se han desclasificado parcialmente, muy parcialmente porque están bastante censurados [...] [los documentos] son ya suficiente información para concluir, que son actividades de grupos irregulares colombianos en Venezuela [...] Dicen [los documentos] que las AUV [Autodefensas Unidas Venezolanas] fueron creadas por las AUC [...] Esto fue en el año 2003, incluso dicen que fueron creadas el primero de marzo de 2003. Podemos concluir que Estados Unidos, desde el año 2003, casi desde su creación, tenía el conocimiento pleno de su existencia [...] Estados Unidos no ha denunciado esto [...].

Preocupa aún más que el involucramiento colombiano ha sido en los niveles más altos del gobierno, desde instancias

oficiales como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ministerio del Interior. Así fue revelado por el ex director del DAS, Rafael García, en una entrevista con Telesur (2009), quien afirmó contundentemente la participación de ambas instituciones junto al Bloque Norte de las AUC en la conspiración contra Venezuela.

Recientemente, el gobernador opositor de Táchira (frontera con Colombia) anunció su intención de enviar a los policías locales a entrenarse con la policía colombiana —que a su vez son entrenados directamente por Estados Unidos— (ABN, 2009). El episodio desató nuevos indicios de las intenciones de Colombia y la posible injerencia estadounidense detrás de la propuesta.

### **Nueva arquitectura de la seguridad Imperial**

Dentro de la nueva estrategia geopolítica estadounidense, la lucha contra las drogas permite el montaje de una red de vigilancia capaz de abarcar toda Latinoamérica. La red está compuesta de bases militares y radares dispersos en diferentes países, que se articulan según las necesidades norteamericanas.

Existen fuertes sospechas sobre el papel que jugó la Base de Manta (Ecuador) durante la planificación del golpe de Estado del 2002 en Venezuela. Asimismo, hay fuertes indicios de que los radares





instalados en Aruba facilitan la vigilancia sobre esa nación (Calvo Ospina, 2008: 302).

Para el 2008, Estados Unidos y Costa Rica acordaron la instalación de tres radares con tecnología de recopilación de comunicaciones, destinados “exclusivamente” para la guerra contra las drogas, localizados en Cerro Azul y Nandayure (Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de la República de Costa Rica, 2008: 1-3). La instalación de dichos radares, junto a la posible instalación de nuevas bases militares en Panamá (DPA, 2009), dejan claras las intenciones expansionistas de una *nueva arquitectura de seguridad* que pretende unificar aún más al continente. Basta con analizar el mapa latinoamericano e identificar las bases militares norteamericanas, junto a sus ejercicios conjuntos, para vislumbrar claramente que se trata de una red continental, donde los espacios estratégicos delineados por el Pentágono están cubiertos (Mapa 3).

La policía fronteriza panameña está siendo entrenada por el gobierno norteamericano y las autoridades militares panameñas se encuentran bajo la dirección de autoridades estadounidenses, según acuerdos administrativos firmados durante el gobierno de Mireya Moscoso (Calvo Ospina, 2008: 308-310). Lo mismo ocurre con el ejército y la policía de Colombia. De hecho, entre 1984 y 1992, 6.894

militares pasaron por la desprestigiada<sup>16</sup> Escuela de las Américas. Colombia es el país que más ha enviado militares a prepararse en dicha institución, con 9.679 egresados (Lozano Guillén, 2006: 117).

El Plan Puebla Panamá (PPP) es un punto de referencia para comprender la nueva estrategia estadounidense para la región. El ambicioso proyecto pretende unir la región mesoamericana, creando las condiciones necesarias para facilitar la dominación comercial. El Plan Mérida, complementario del PPP, busca aplicar las estrategias de seguridad del Plan Colombia, ahora para la región centroamericana y de México.

Los objetivos que la ofensiva militar estadounidense emprendió con esta nueva arquitectura de seguridad hemisférica no son otros más que garantizar el acceso a recursos estratégicos y la consolidación de mercados regionales. Cabe recordar las palabras del general Peter Pace, Comandante en Jefe del Comando Sur durante la administración Clinton: “[la] permanente estabilidad requerida para el acceso a los mercados [...] es crucial para la continua expansión económica y prosperidad de EUA” (en Stokes, 2005: 287). Según dicha visión, cualquier iniciativa adversa a

<sup>16</sup> La escuela ha sido catalogada como una ‘escuela de asesinos’, especialmente por el papel de sus egresados en los golpes de Estado en toda América Latina y su desempeño en la Operación Cóndor. Los manuales elaborados en dicha escuela horrorizaron al mundo entero por sus crudas tácticas de tortura. Para más detalles ver: McCoy, 2006.





las transnacionales estadounidenses podría significar un factor de desestabilización.

El papel de Brasil como potencia –militar y económica– de la región y el de Venezuela –como potencia política– son vitales para contrarrestar esta nueva ofensiva. Ambos actores han venido articulando la resistencia sudamericana a partir de la UNASUR, proyecto que ocasionó la movilización de la Cuarta Flota estadounidense de nuevo al Océano Pacífico (Pignotti, 2009: 10).

Brasil es el foco de mayor importancia para Washington. Cabe recordar que el gobierno de Lula ha emprendido un ambicioso programa nuclear con ayuda de Francia (Lerer, 2009: 10). Asimismo, las adquisiciones militares que hiciese Brasil recientemente, junto al hallazgo de importantes yacimientos petrolíferos en el Atlántico, hacen que el coloso sudamericano se sienta amenazado directamente (Pignotti, 2009: 10).

La reciente decisión del gobierno colombiano de permitir la instalación de varias<sup>17</sup> nuevas bases militares en su territorio (ver Mapa 4) fue el tema de discusión durante la Cumbre de UNASUR en Bariloche, Argentina. En esta cumbre quedó claramente evidenciada la articulación regional; Colombia fue aislada por los países sudamericanos,

<sup>17</sup> El número varía entre 7 y 9, debido a que el tratado mediante el cual se establecen las bases sigue siendo secreto.

quienes demandaron explicaciones sobre el documento secreto (Courrier International, 2009: 19).

### Dominación más allá de Latinoamérica

La nueva doctrina denominada *Full Spectrum Dominance* (Dominación total del espectro) impera en el ideario estratégico militar estadounidense. Dicha doctrina sostiene la importancia militar de garantizar el control de cualquier escenario de batalla, desde el espacio aéreo hasta la guerra no convencional<sup>18</sup> (Joint Staff, 2003: 7-10).

China está dominando su espacio marítimo inmediato, se está constituyendo como una potencia naval en Asia y es hoy la tercera potencia naval en el ámbito global (Zajec, 2008: 16-17). Estados Unidos busca hacer lo mismo con su zona de influencia próxima para asegurar su dominio sobre el hemisferio occidental y poder mantener su esfuerzo expansionista en Medio Oriente. Por ello no debe sorprender un posible acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, que brindaría una amplia movilidad naval.

En esta misma dirección, las bases estadounidenses en Colombia permitirán un despliegue flexible de aeronaves para dominar el espacio aéreo continental; de hecho, según el *Global En Route*

<sup>18</sup> Esta modalidad de guerra se basa en formas alternativas al combate armado. Se cataloga como guerra de cuarta generación.



*Strategy* (2009), la base aérea en Palanquero (Colombia) provee una localización estratégica, ya que desde ahí un C-17 puede recorrer la mitad del continente sin necesidad de reabastecerse de combustible. Esto permitirá al gobierno norteamericano contar con una movilidad aérea que, junto a la extensa red de radares alrededor del continente, provee una capacidad de dominación territorial sin precedentes.

Según el padre de la geopolítica, Harold MacKinder, quien domina la zona de Eurasia domina al mundo (Casadio, 2004: 129). Las recientes aventuras militares estadounidenses, tanto en los Balcanes (1991) como las más recientes en Irak y Afganistán, demuestran que el interés estadounidense está en esa zona geoestratégica.

Con este escenario como trasfondo, es vital para Estados Unidos garantizar el control del petróleo latinoamericano, por cuestiones de logística y seguridad. No en vano, el Departamento de Estado considera que Chávez es una “amenaza para la Seguridad Nacional” estadounidense (Hill, en Calvo Ospina, 2008: 301), ya que el líder izquierdista ha despertado una corriente de cambios políticos en el mapa sudamericano, y presidentes como Rafael Correa y Evo Morales han seguido proyectos similares. La nacionalización de los hidrocarburos en estos países, históricamente aliados a Estados Unidos, viene en el peor momento, en el cual esa nación requiere de

todo el combustible barato posible. La negativa venezolana de someterse a las direcciones de la DEA también ha sido seguida por Bolivia.

Después de Venezuela y México, el petróleo colombiano es de gran importancia para el gobierno estadounidense (Stokes, 2005: 289-290). Según una reciente publicación de la British Petroleum (2009), Venezuela tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes de América. Ante dicho panorama, está demás decir que los intentos por desprestigiar y deslegitimar al presidente Chávez van a continuar en incremento, con plena complicidad de la derecha y los medios comerciales oligárquicos del continente.

### **El modelo colombiano: experimento para el mundo**

La evolución reciente del conflicto colombiano –a partir del Plan Colombia y su intensificación– se está convirtiendo en la puesta en práctica del nuevo paradigma militar en el ámbito global. Las similitudes entre las operaciones militares estadounidenses en Afganistán e Irak con las operaciones en Colombia revelan que se trata de la aplicación del *Full Spectrum Dominance*, el nuevo modelo de guerra de Estados Unidos.

Soldados colombianos entrenados por los Boinas Verdes norteamericanos son desplegados en Afganistán para operaciones de contraterrorismo y contrainsurgencia



(Rozoff, 2009). En Irak, al igual que con el Plan Colombia, el gobierno estadounidense financia y entrena a una brigada especial antiterrorista que opera como un escuadrón de la muerte, que se despliega a lo largo del territorio con equipo militar norteamericano de última tecnología, cobrando víctimas selectivamente (Bauer, 2009: 13-14).

El reciente golpe de Estado en Honduras no hubiese sido posible sin el Escuadrón Cobra. Recientemente, la ONU ha alertado sobre miembros de las antiguas AUC contratados por empresarios hondureños que apoyaron el golpe para eliminar a la resistencia (UNHCHR, 2009).

Es claro que estas fuerzas operativas especiales y mercenarias tienen una capacidad de despliegue inmediato en los diversos escenarios geoestratégicos para Estados Unidos, de manera que a la hora de un conflicto se cuenta con la flexibilidad requerida para ganarlo. Las redes que se han tejido entre las derechas continentales facilitan aún más la aplicación de ese modelo.

La información es el componente principal de estas fuerzas; desde la *Seguridad Democrática* de Uribe hasta los escuadrones de la muerte de Irak, la inteligencia y la recopilación de información son las prioridades más importantes del esquema. No debe sorprender que este nuevo modelo estratégico se esté aplicando en Afganistán (Rozoff, 2009). La progresiva privatización

de las guerras por parte del gobierno norteamericano y la creación de escuadrones de la muerte en todos los escenarios bélicos son claros reflejos de la nueva estrategia militar estadounidense, donde la movilidad es un elemento medular.

### Un futuro incierto

No se puede hablar de democracia, de justicia ni de soberanía en Colombia. La brutalidad del conflicto colombiano está cobrando más muertes que las dolorosas y sanguinarias dictaduras del Cono Sur (ver Tabla 1).

Los estudiantes universitarios, los indígenas y cualquier otro grupo social opuesto al gobierno de Uribe Vélez son tachados de terroristas. La persecución a toda oposición se ha convertido en la regla. La justicia colombiana es espiada por los servicios de inteligencia del Estado (Hauggaard y Moon, 2009), y quienes intentan revelar la verdad se sienten amenazados.

El inmenso aparato mediático corporativo de América Latina y del mundo son cómplices del genocidio que vive Colombia: tapando los vínculos entre el gobierno de Uribe y el paramilitarismo y exhibiendo con todo el triunfalismo posible los reveses de las FARC-EP. Esto ilustra el posicionamiento ideológico que han decidido tomar los medios de comunicaciones, en detrimento de la verdad y la justicia.



Si bien las FARC-EP han cometido errores, injusticias y excesos, su responsabilidad es sumamente inferior a la del paramilitarismo y el gobierno colombiano. Persistir en la satanización del grupo irregular, como lo continúan haciendo los medios de comunicación, es a todas luces, negar las profundas contradicciones estructurales de un país donde el 53% de la tierra del campo pertenece a un 1.8% de la población (Pécaut, en Labrousse, 2004).

La sanguinaria cúpula que ocupa hoy el Palacio de Nariño ha demostrado su desdén por la vida humana, y la lucha contra las FARC-EP ha llegado a un fracaso rotundo, demostrado en el más reciente escándalo de los *falsos positivos*, jóvenes en busca de un futuro mejor que fueron asesinados por el ejército para hacer pasar sus cuerpos por guerrilleros (Equipo Desde Abajo, 2009). El silencio del mundo entero demuestra que en Colombia se está forjando un modelo de gobierno para exportación. Uno donde los desaparecidos se pierden en el olvido, los crímenes quedan en plena impunidad, el abuso del Estado está justificado y los medios de comunicación se encargan de silenciar lo que pueda quedar de disidencia, todo con la complacencia y legitimación de la comunidad internacional. Colombia es el laboratorio del poder global.

## Referencias bibliográficas

### Libros

- Alzugaray, Carlos. (2008). "Crisis de hegemonía y orden mundial: la relación Estados Unidos-América Latina". En: Jorge Hernández Martínez (Comps.). *Los EEUU a la luz del siglo XXI*. La Habana, Cuba. Editorial de Ciencias Sociales.
- Beltrán, Pablo. (2008). *De la resistencia al poder popular*. Querétaro, México. Ocean Sur.
- Bernal, Federico. (2005). *Petróleo, estado y soberanía*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Biblos.
- British Petroleum. (2009). *BP Statistical Review of World Energy*. Londres, Gran Bretaña. Beacon Press.
- Britto García, Luis. (2008). *La paz con Colombia*. Caracas, Venezuela. Publicaciones Minci.
- Calvo Ospina, Hernando. (2008). *Colombia, laboratorio de embrujos*. Madrid, España. Editorial Foca.
- Casadio, Mauro et al. (2004). *Imperio con imperialismo*. La Habana, Cuba. Editorial de Ciencias Sociales.
- Castillo, Fabio. (1996). *Los nuevos jinetes de la cocaína*. Bogotá, Colombia. Editorial Oveja Negra.
- Chomsky, Noam. (2004). *Hegemony or Survival*. New York, EE. UU. Metropolitan-Holt.
- Chomsky, Noam. (2007). *Failed States*. New York, EE. UU. Metropolitan-Owl Book.
- Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de la República de Costa Rica. (2008). *Memorando de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica*. Documento Oficial: MOU-US 08-153.
- Joint Staff. (2003). *An Evolving Joint Perspective: US Joint Warfare and Crisis Resolution in the 21<sup>st</sup> Century*. Washington D.C., EE. UU. Joint Vision and Transformation Division.
- Lozano Guillén, Carlos. (2006). *¿Guerra o paz en Colombia?* Bogotá, Colombia. Ocean Sur.
- Matta Aldana, Luis Alberto. (1999). *Colombia y las FARC-EP*. Navarra, España. Editorial Txalaparta.



- Stokes, Doug. (2005). "Terrorismo, petróleo y capital: la contra-insurgencia norteamericana en Colombia". En: Leo Panitch y Colin Leys (Comps.). *El imperio recargado*. Buenos Aires, Argentina. CLACSO.
- Suárez, Luis. (2006). *Un siglo de terror en América Latina*. Melbourne, Australia. Ocean Sur.
- United States Air Force. (2009). *Global En Route Strategy*. Air Force's Air Mobility Command. Virginia, EE. UU.
- Zibechi, Raúl. (2008). "Protección comunitaria contra la guerra". En: Ariel Dacal y José Ramón Vidal (Comps.). *La América Latina contrahegemónica*. La Habana, Cuba. Editorial Caminos.

#### Revistas

- Arias, Wilson. (2009). "BID, etanol y democracia profunda". *CEPA*. Año IV. Volumen I. N° 8. Págs. 25-29.
- Bauer, Shan. (2009). "Iraq's New Death Squad". *The Nation*. Volumen 288. N° 24. Págs. 11-16.
- Cadena Montenegro, José Luis. (2006). "El Plan Puebla Panamá ¿la recolonización de América Latina?". *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. Volumen 1. N° 002. Págs. 121-155.
- Caicedo, Juan Pablo. (2006). "Amenazas y oportunidades de la estrategia actual de negociación frente al paramilitarismo en el marco de la relación de Colombia con Estados Unidos". *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*. N° 1. Págs. 35-54.
- Courrier International. (2009). "La Colombie complètement isolée". *Courrier International*. N° 983. Pág. 19.
- Equipo de Alternativa. (1996). "¿Mano dura o amenaza paramilitar?". *Revista Alternativa*. N° 5. Reproducida en: *CEPA*. Año IV. Volumen 1. N° 8. Págs. 71-74.
- Guerrero, Mariela. (2009). "Testimonio de Gloria Cuartas: Urabá, laboratorio de la política de Seguridad Democrática". *CEPA*. Año IV. Volumen I. N° 8. Págs. 75-81.
- Labrousse, Alain. (2004). "Colombie: Le rôle de la drogue dans l'extension territoriale des FARC-EP". *Hérodote*. N° 112. Págs. 27-48.
- Petras, James. (2001). "The Geopolitics of Plan Colombia". *Monthly Review*. Volumen 54. N° 1. Pág. 30.
- Serje, Margarita. (2006). "Geopolítica de la ocupación territorial de la nación en Colombia". *Gestión y Ambiente*. Volumen 9. N° 3. Págs. 21-28.

#### Periódicos

- Batero, Diego. (2009). "Desplazamiento en Colombia: otra cara de la opresión". *Periferia*. Edición 36. Pág. 13.
- Colmenares, Rafael. (2008). "Referendo por el agua llega al Congreso". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VII. N° 73. Pág. 26.
- Congote, Bernardo. (2009). "Paramilitarismo y seguridad democrática en Colombia". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VIII. N° 81. Págs. 12-13.
- Desde Abajo, Equipo. (2009). "Desplazados, crece el drama". *Periódico Desde Abajo*. Año XVIII. N° 146. Pág. 12.
- Desde Abajo, Equipo. (2009). "Falsedad de toda falsedad". *Periódico Desde Abajo*. Año XVIII. N° 146. Pág. 11.
- Ferreira, Marcelo. (2009). "El genocidio en Colombia y sus modos de realización simbólica". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VIII. N° 81. Págs. 11-12.
- Gutiérrez, Carlos. (2009). "Política y poder: la marca del narco". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VIII. N° 82. Págs. 2-3.
- Gutiérrez, Carlos. (2009). "Venezuela, ante el poder desestabilizador del crimen organizado". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VIII. N° 80. Pág. 3.
- Lerer, Rebeca. (2009). "O Brasil Atômico". *Le Monde Diplomatique - Brasil*. Año II. N° 24. Págs. 10-11.
- López, Gilberto. (2009). "Senadora Piedad Córdoba: 'Hace 10 años que paramilitares



están en Costa Rica". *Semanario Universidad*. N° 1809. Pág. 26.

Pignotti, Darío. (2009). "Brasil se siente amenazado". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VIII. N° 82. Pág. 10.

Sorín, Jaime. (2009). "Diez años después del Pacto Paramedellín". *Periódico Desde Abajo*. Año XVIII. N° 142. Pág. 10.

Zajec, Olivier. (2008). "China reafirma sus ambiciones". *Le Monde Diplomatique - Colombia*. Año VII. N° 71. Págs. 16-18.

#### Conferencias

Chomsky, Noam. (2009). Conferencia: *Guerras, drogas y política, elementos del mundo bipolar*. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. 21/9/09.

Córdoba, Piedad. (2009). Conferencia: *Plan de Paz para Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Costa Rica. Heredia, Costa Rica. 8/6/09.

Pineda, Nelson. (2009). Conferencia: *Plan Colombia: un plan para la guerra, el subdesarrollo y la militarización de la región*. San José, Costa Rica. Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica. 29/9/09.

#### Video

Gómez, Mauricio (Director). (2008). Documental: *¡Colombia Vive! 25 años de resistencia*. Bogotá, Colombia. Semana-Caracol TV (Productora).

#### Internet

Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). (2009). "Gobierno intervendrá policía de Táchira si comienza a formar funcionarios en Colombia". ABN. Accesado el 12/10/09. Desde: <http://www.abn.info.ve>

Bodzin, Steven. (2009). "Venezuela becomes US's Second-Biggest Fuel Supplier (Update 1)". *Bloomberg*. Consultado el 3/10/09. Desde: [\[berg.com/apps/news?pid=20601072&sid=avLAhzw5H7cg\]\(http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601072&sid=avLAhzw5H7cg\)](http://www.bloom-</a></p></div><div data-bbox=)

DPA, Agencia de Noticias. "Instalará EU bases navales en Darién y Punta Coca, Panamá". *La Jornada*. Consultado el 4/10/09. Desde: <http://www.jornada.unam.mx/2009/09/28/index.php?seccion=mundo&article=029n2mun>

Elizondo, Gabriel. (2009). "Video: \$25 m plot 'to kill Chávez'". *Al-Jazeera*. Consultado el 4/10/09. Desde: <http://english.aljazeera.net/news/acas/2009/09/2009926105146717728.html>

Escobar, Pepe. (2009). "US's 'Arc of instability' just gets bigger". *Asia Times*. Consultado el 7/10/09. Desde: [http://www.atimes.com/atimes/South\\_Asia/KI03Df01.html](http://www.atimes.com/atimes/South_Asia/KI03Df01.html)

Ferrer, Isabel. (2009). "Quito lleva a La Haya las fumigaciones en la frontera colombiana". *El País*. Consultado el 4/10/09. Desde: <http://www.elpais.com>

Forero, Juan. (2009). "Venezuela's Drug-Trafficking Role Is Growing Fast, U.S. Report Says". *Washington Post*. Consultado el 12/10/09. Desde: <http://www.washingtonpost.com>

Haugaard, Lisa y Moon, Millie. (2009). "Far Worse Than Watergate". *America's Program Report*. Accesado el 19/10/09. Desde: <http://americas.irc-online.org>

IPC, Agencia de Noticias. (2009). "Un líder paramilitar reconoce que financió la campaña electoral de Uribe". *Rebelión*. Consultado el 15/9/09. Desde: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=84305&titular=un-1%Edderparamilitar-reconoce-que-financi%F3-la-campa%F1a-electoral-de-uribe->

Rodríguez, Pablo. (2009). "Por pobreza y conflicto armado, un millón de niños trabajan en Colombia". *Agence Frances Press*. Consultado el 17/9/09. Desde: <http://www.observatoriodemigraciones.org/>

Rozoff, Rick. (2009). "The Pentagon's 21st Century Counterinsurgency Wars: Latin America and South Asia". *Global*



- Research. Consultado el 18/10/09. Desde: [www.globalresearch.ca](http://www.globalresearch.ca)
- Telesur, Agencia de Noticias. (2008). "Justicia de EEUU pide retirar cargos por narcotráfico contra Simón Trinidad". *Telesur*. Consultado el 4/10/09. Desde: <http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/27578-NN/justicia-de-eeuu-pide-retirar-cargos-por-narcotrafico-contra-simon-trinidad/>
- Telesur, Agencia de Noticias. (2009). "Documentos desclasificados revelan impulso de Estados Unidos a formación de paramilitares en Venezuela". *Telesur*. Consultado el 4/10/09. Desde: <http://www.telesurtv.net/noticias/entrev-reportajes/index.php?ckl=387>
- Telesur, Agencia de Noticias. (2009). "Ex director del DAS ratificó colaboración colombiana en planes contra Venezuela". *Telesur*. Consultado el 5/10/09. Desde: <http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/57176-NN/ex-director-del-das-ratifico-colaboracion-colombiana-en-planes-contra-venezuela/>
- Telesur, Agencia de Noticias. (2009). "Video confirma que armas en poder de las FARC fueron robadas al ejército venezolano". *Telesur*. Consultado el 8/10/09. Desde: <http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/56710-NN/video-confirma-que-armas-en-poder-de-las-farc-fueron-robadas-al-ejercito-venezolano/>
- United Nations High Commissioner for Human Rights. (2009). "UN experts raise concerns over alleged use of mercenaries in Honduras". *UNHCHR*. Consultado el 10/10/09. Desde: <http://www.unhcr.ch>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2008). *2008 World Drugs Report: Seizures*. Accesible desde: [http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR\\_2008/SEIZURE\\_Tables.pdf](http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/SEIZURE_Tables.pdf)
- Vieira, Constanza. (2009). "Colombia: EEUU debe abrir archivos sobre el Palacio de Justicia". *Inter-Press Service*. Consultado el 14/10/09. Desde: <http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93579>








Mapa 1 – Zonas de influencia de las FARC y cultivos de coca (Colombia)



**Leyenda:**

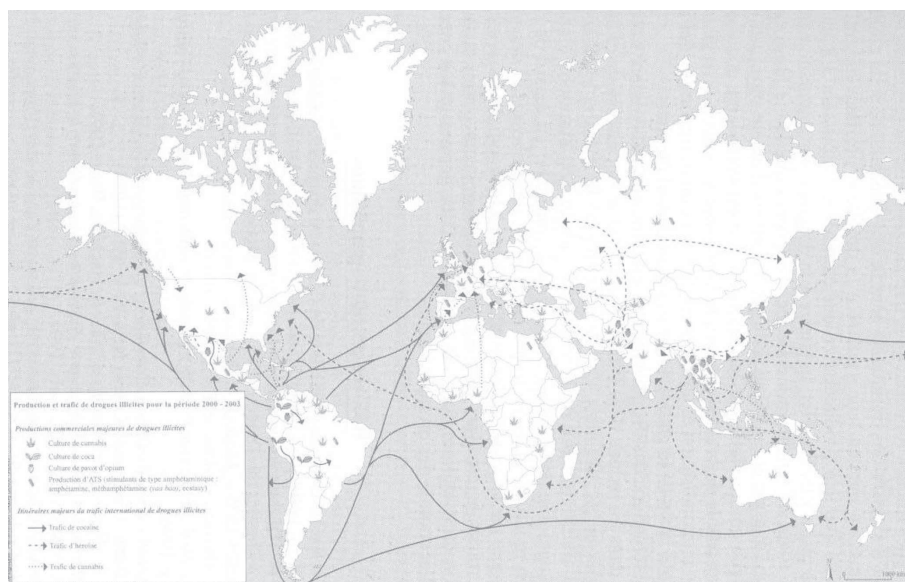
-  Influencia de las FARC-EP
-  Presencia fuerte de las FARC-EP
-  Cultivos de coca

**Fuente:** Alain Labrousse. (2004). "Colombie: Le rôle de la drogue dans l'extension territoriale des FARC-EP". *Hérodote*. N° 112. Página 31.





Mapa 2 – Rutas globales del narcotráfico para el período 2000-2003



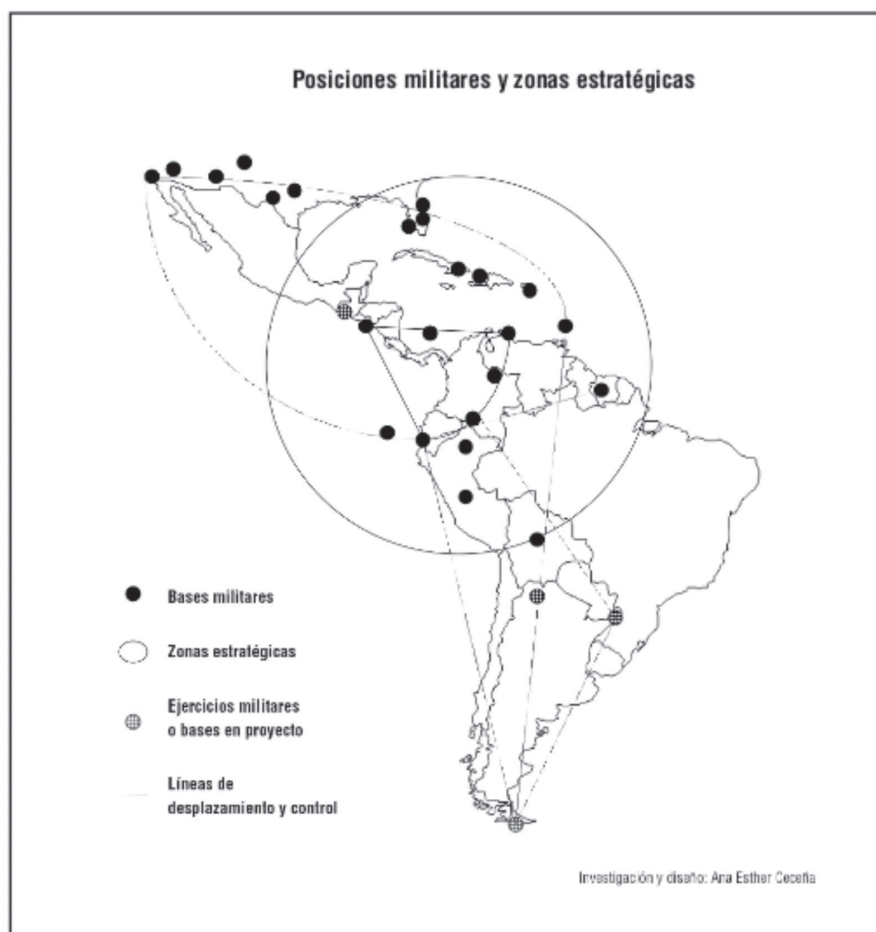
**Leyenda:**

- Tráfico de cocaína
- - - - - Tráfico de heroína
- ⋯⋯⋯ Tráfico de cannabis

**Fuente:** Pierre Arnaud Chouvy y Laurent Laniel. (2004). “De la géopolitique des drogues illicites”. Hérodote. N° 112. Página 23.



Mapa 3 – Bases estadounidenses y zonas estratégicas en el continente\*



\* Nota: La figura de “Bases militares” en el mapa incluye radares estadounidenses. No se incluyen las nuevas siete bases militares a instalarse en Colombia.

**Fuente:** Ana Esther Ceceña. (2004). Militarización y resistencia. *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Año V, N° 15. Página 41.



Mapa 4 – Nuevas bases militares estadounidenses en Colombia



**Fuente:** Henry Ramírez Soler. (2009). “¿Bases militares norteamericanas en Colombia, extensión de acuerdos militares o implantación de la Escuela de las Américas?”. Tercera Información. Consultado el 9/10/09. Desde: <http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article10183>



Tabla 1. Desapariciones y asesinatos en Colombia y las dictaduras militares del Cono Sur

País	Años de dictadura militar	Asesinatos y/o desapariciones
Argentina	8	9.000
Brasil	15	125
Uruguay	16	220
Bolivia	17	2.021
Chile	17	2.666
Colombia	(pdte. Barco, 1986-1990)	13.635
Colombia	(pdte. Gaviria, 1990-1994)	14.856
Colombia	(pdte. Uribe, Agosto 2002-Junio 2004)	10.586
Colombia	(pdte. Uribe, Diciembre 2008-Abril 2009)	49.902*

\* Los datos de este período se basan en una investigación de la Fiscalía colombiana a partir de las denuncias de desapariciones registradas por las diferentes entidades responsables. La cifra final se obtuvo a partir de denuncias aún no resueltas. El número no refleja necesariamente el total de desapariciones en ese período, ya que las denuncias siguen abiertas.

**Fuente:** Elaboración propia.

**Datos obtenidos de:** Hernando Calvo Ospina. (2008). *Colombia, laboratorio de embrujos*. Madrid, España. Editorial Foca. Página 361.

Equipo Desde Abajo. (2009). "Llegan a 50 mil las denuncias de personas desaparecidas". *Periódico Desde Abajo*. Año XVIII. N° 146. Página 11.

